



Juzgado Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Pasto

UNIDAD DE RESTITUCION DE
TIERRAS TERRITORIAL NARIÑO

No. Rad:DTNP1-2014-03263 No. Folios: 12
Fecha:10/07/2014 Hora:10:30 AM
Escriba: NESLY LORENA MESA BOLAÑOS
AUXILIAR DE CORRESPONDENCIA 4-72 URT

OFICIO – JCCERTP 3216
Pasto, 08 de julio de 2014

Abogada:
AURA MONTENEGRO
APODERADA PARTE SOLICITANTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
DESPOJADAS DE NARIÑO // Calle 20 No. 23-56-60 / Pasto

Referencia: Sentencia Proceso de Restitución de Tierras No. 2013 – 00261-00
Solicitante: MARTHA ARTURO LOPEZ

Por medio del presente, para efectos del cumplimiento de las órdenes dictadas, me permito transcribir la parte RESOLUTIVA de la SENTENCIA dictada dentro del asunto de la referencia el día 07 de julio de 2014, que es del siguiente tenor:

"(...) RESUELVE. (...) PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental a la restitución de tierras de la señora **MARTHA ARTURO LOPEZ**, su compañero permanente **MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ**, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 27.189.859 y 5.246.394 respectivamente y su núcleo familiar al momento del desplazamiento, frente a la porción de terreno inscrita en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente denominada "LA PEDREGOSA", registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25630 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), identificada con el número catastral 52-258-00-01-0003-0114-000 ubicado en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño. SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER que dentro del plazo máximo de dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, adjudique en favor de la señora **MARTHA ARTURO LOPEZ** y su compañero permanente **MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ**, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 27.189.859 y 5.246.394 respectivamente, la porción de terreno inscrita en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente denominada "LA PEDREGOSA" con un área total de dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m²), por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para tal fin, cuyos datos de individualización se resumen en los siguientes cuadros: DATOS GENERALES "LA PEDREGOSA"

Nombre	LA PEDREGOSA
Matrícula inmobiliaria	246-25630 abierto el 31 de octubre de 2013 en cumplimiento de resolución RNI-461 9/09/13 proferida por la UAEGRTD, a favor de la Nación.
Cédula o código catastral	52-258-00-01-0003-0114-000
Ubicación	Vereda Pitalito Alto Corregimiento de La Cueva Municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño.
Extensión superficial o área total	dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m ²)

CUADRO DE COORDENADAS "LA PEDREGOSA"

PUNTO No.	Coordenadas geográficas		Coordenadas planas	
	Latitud	Longitud	Norte	Este (m)
1	1° 25' 7,509"N	77° 3' 33,500" W	648645,389	1002025,648
2	1° 25' 7,413"N	77° 3' 33,383" W	648642,455	1002029,269
3	1° 25' 6,583"N	77° 3' 32,116" W	648616,947	1002068,454
4	1° 25' 5,493"N	77° 3' 33,721" W	648583,470	1002018,836
5	1° 25' 6,018"N	77° 3' 33,923" W	648599,612	1002012,579
6	1° 25' 6,184"N	77° 3' 34,361" W	648604,702	1001999,045
7	1° 25' 6,261"N	77° 3' 34,770" W	648607,058	1001986,409
8	1° 25' 6,289"N	77° 3' 35,000" W	648607,907	1001979,305
9	1° 25' 6,807"N	77° 3' 34,862" W	648623,837	1001983,561

CUADRO DE COLINDANCIAS "LA PEDREGOSA"

ORIENTACION	PUNTOS	DISTANCIA (m.)	COLINDANTE
NORTE	1 a 2	4,7	JULIO CESAR LOPEZ
	2 a 3	46,8	JOSE DEMETRIO PAZ
ORIENTE	3 a 4	59,9	AURA NUUVIA YELA
SUR	4 a 6	31,8	DIEGO EXENOVER BENAVIDES
	6 a 8	20,0	JAIME MARTINEZ
OCCIDENTE	8 a 1	63,8	VIA TABLON - APONTE

Una vez proferido el acto administrativo de adjudicación, el mismo deberá ser notificado a sus beneficiarios y deberá ser inscrito ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), en el folio de matrícula inmobiliaria 246-25630, atendiendo el criterio de gratuidad consagrado en el par. 1° art. 84 de la ley 1448 de 2011. Para verificar el cumplimiento de lo anterior, la Oficina competente deberá remitir con destino al proceso de la referencia copia de las actuaciones que adelante, so pena de las sanciones a que haya lugar por negligencia o incumplimiento. Por secretaría remitirse informes técnico predial y de georeferenciación obrantes en el expediente para el debido cumplimiento de la orden emitida. TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz, que dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la presente decisión, realice las actividades de actualización, que se exponen a continuación en el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25630 atendiendo el criterio de gratuidad consagrado en el par. 1° art. 84 de la ley 1448 de 2011: (i) el registro de la presente sentencia reconociendo el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor de MARTHA ARTURO LOPEZ, junto con su grupo familiar; (ii) la inscripción de prohibición de compraventa o cualquier negociación durante el término de dos (2) años del inmueble que se ve cobijado por el presente fallo, de acuerdo con el art. 101 de la ley 1448 de 2011; (iii) el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por la UAEGRTD y por este Juzgado con ocasión de la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras; (iv) el registro del acto administrativo de adjudicación del inmueble, ordenado en el numeral "SEGUNDO" de esta providencia, atendiendo criterios de gratuidad, una vez INCODER comunique su cumplimiento. Registrada la adjudicación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto deberá informar que ha cumplido, a este Despacho y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, para lo de su competencia. Por Secretaría LIBRAR los oficios pertinentes con los insertos necesarios. CUARTO: ORDENAR al Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC como autoridad catastral para el Departamento de Nariño que realice, dentro del plazo máximo de dos (2) meses siguientes a la comunicación del registro de la adjudicación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto ordenada en esta providencia, la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos del predio cuyas características de individualización se encuentran consignadas en el numeral "SEGUNDO" de la presente sentencia, de conformidad y con estricta sujeción a los datos consignados en los cuadros precedentes, de acuerdo al literal p) del



*Juzgado Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Pasto*

artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. En caso de no tener el anterior numeral algún dato necesario para la actualización encomendada se tendrá en cuenta la información que reposa en los informes técnico predial (fs. 67 a 71, cuaderno 1) y de georreferenciación (fs. 22 a 26, cuaderno 2) aportados a este asunto y, de no ser suficientes, se requerirá a la UAEGRTD para que realice las complementaciones pertinentes. Para efectos de lo anterior, por Secretaría se remitirán los oficios pertinentes con copia de los documentos antes citados y de la presente sentencia, para que el IGAC pueda adelantar el procedimiento de actualización. Adicionalmente, se ordena a la UAEGRTD que preste toda la información y remita al IGAC los documentos necesarios, cuando este último así lo requiera.

QUINTO: ORDENAR al Banco Agrario de Colombia y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural prioricen la asignación y aplicación de forma prioritaria preferente y con enfoque diferencial, para la solicitante señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificado(a) con C.C. 27.189.859 y/o su cónyuge el señor MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ identificado(a) con la C.C. 5.246.394 de los programas de subsidio familiar de vivienda rural, subsidio integral de tierras (Subsidios para la adecuación de tierras, asistencia técnica agrícola, e inclusión en programas productivos) proyectos productivos y todos lo demás especiales que se creen a favor de las personas víctimas de desplazamiento. Así mismo se ordena al Banco Agrario poner en conocimiento de la solicitante y su familia, la información pertinente acerca las líneas de crédito diseñadas para apoyar a la población desplazada y la forma de acceder a las mismas. Para verificar el cumplimiento de lo anterior, las entidades requeridas deberán presentar un informe con destino al proceso de la referencia, dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de la presente sentencia. **SEXTO: ORDENAR a la Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez**, aplique a favor de la señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificado(a) con la C.C. 27.189.859 y su núcleo familiar, la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones, contempladas en el Acuerdo No. 022 del 15 de agosto de 2013, en relación con el predio objeto del presente proceso de restitución de tierras denominado "LA PEDREGOSA". Así mismo, se ordena a la **Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez** que en caso de llegar a implementarse por parte del Concejo Municipal de El Tablón de Gómez medidas adicionales relativas a la exención y alivio de impuestos, se incluya como beneficiarios de manera inmediata a MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar, frente al predio cubierto por la presente sentencia denominado "LA PEDREGOSA". **SEPTIMO: ORDENAR al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras de Restitución de Tierras Despojadas**, adelante las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos y entidades del sector financiero, para que adopten planes de alivio que puedan incluir condonación total o parcial de los pasivos contraídos por los beneficiarios de la restitución y que se encuentren asociados al predio objeto de esta solicitud, con la salvedad de que dicho mecanismo se activa solamente por el periodo en que se produjo el desplazamiento de conformidad con el Artículo 43 Inciso 3 del Decreto 4829 de 2011 y el artículo 121 de la ley 1448 de 2011. **OCTAVO: ORDENAR a la Unidad De Atención y Reparación Integral de Víctimas** para que realice las siguientes acciones: (i) incluir en el Registro único de víctimas – RUV a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificada con la C.C. 27.189.859, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por los hechos de violencia ocurridos a partir del día 10 de abril de 2003 en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del municipio de Tablón de Gómez – Nariño, junto con las siguientes personas que conformaban su núcleo familiar en ese entonces:

NOMBRE	No. identificación	Parentesco con la solicitante
MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ	C.C. 5.246.394	Compañero permanente
CAMILA PAZ ARTURO	T.I. 1004631451	Hija

(ii) Realizar seguimiento a la situación de la solicitante y su núcleo familiar, con el fin de que se los incluya dentro de todos los programas y proyectos pertinentes, dirigidos a atender a la población víctima de desplazamiento y a acompañar el retorno de los desplazados. Para el cumplimiento de lo anterior, la entidad referida tendrá con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este proveído, vencido el cual, deberá allegar con destino a este Despacho, informe sobre las actuaciones realizadas. **NOVENO: ORDENAR al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL** para que en coordinación con la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS**, en el marco de sus competencias priorice la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002 a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.189.859, y su núcleo familiar, como mujer rural favorecida con el proceso de restitución, en los términos del artículo 117 de la Ley 1448 de 2011. **DECIMO:** En aras de dar cumplimiento a lo informado en el literal p) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011 sobre contenido del fallo, y en especial teniendo en cuenta la facultad de emitir las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce de los derechos de las personas reparadas; y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial ha verificado la existencia de otros requerimientos de la comunidad del sector, para garantizar la estabilidad del proceso, **se ordena**, que en un término no superior a seis meses se dé cumplimiento a lo siguiente: a) A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas que en conjunto con el Comité Municipal de Justicia Transicional del Municipio del Tablón de Gómez, formule el plan de Retorno del Desplazamiento Masivo ocurrido en el año 2003 en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, de acuerdo con la Política Pública de Retorno, con el fin de que la población desplazada logre su restablecimiento a través de la generación de oportunidades y alternativas de retorno al lugar de donde se vieron forzadas a salir, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad, dignidad y garantías de no repetición. b) Al Ministerio del Trabajo, a la Unidad de Víctimas y al SENA, se implemente y ponga en marcha el Programa de Empleo Rural y Urbano al que se refiere el Título IV, Capítulo I, Artículo 67 del Decreto 4800 de 2011, dirigido a beneficiar a la población víctima del desplazamiento ocurrido en la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento La Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, Departamento de Nariño, incluyendo de forma prioritaria a los beneficiarios de la presente decisión. c) Al Ministerio del Trabajo y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que, en el Corregimiento de La Cueva Vereda Pitalito Alto del Municipio del Tablón de Gómez y dentro de los seis meses siguientes a la notificación de ésta providencia, diseñen e implementen el programa de empleo y emprendimiento Plan de Empleo Rural y Urbano, estipulado en el Título IV, Capítulo I, Artículo 68 del Decreto 4800, dirigido a favorecer a la población víctima del desplazamiento forzado, y una vez que sea puesto en ejecución se realice la inclusión prioritaria de los presentes solicitantes, para beneficiarlos con las ayudas que se puedan desprender de dicho programa. d) A la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ y a la GOBERNACION DE NARIÑO, para que dé inicio a las tareas de gestión de las actividades pertinentes y adopción de los recursos necesarios para la implementación del sistema de alcantarillado, que requiere la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento de la Cueva del Municipio del Tablón de Gómez. En seguimiento del cumplimiento de ésta orden, los referidos entes deberán rendir informe de manera semestral a partir de la notificación de la presente providencia, hasta llevar a cabo la plena ejecución de la citada obra pública. e) A la Alcaldía Municipal del Tablón de Gómez, que en coordinación con el Departamento de Nariño, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el SENA, y de acuerdo con las calidades y propiedades del suelo, realice un estudio acerca de la viabilidad en la implementación de proyectos productivos sustentables en el predio que fue objeto de la presente solicitud, con el fin de aumentar la diversificación y producción local de alimentos, en el Corregimiento de La Cueva Municipio del Tablón de Gómez, y de darse aquella viabilidad, procederá a adjudicar en favor de los actuales reclamantes la realización de proyectos productivos de conformidad con el estudio realizado. Para el cumplimiento de lo anterior, las entidades referidas contarán con un término no superior a los seis contados a partir de la notificación de éste proveído, vencido el cual, allegará, con destino a éste despacho, informe sobre las actuaciones realizadas. f) Al INCODER que inicie los estudios y diagnósticos necesarios sobre la viabilidad de la implementación de un sistema de riego y de darse aquella posibilidad procederá a ejecutar ese sistema en los predios restituidos en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento de la Cueva Municipio del Tablón de Gómez, para lo anterior tendrá un término de seis meses contados a partir de la eventual expedición de la resolución de reprobación de los proyectos presentados por las asociaciones descritas en el párrafo anterior, de cuyos beneficios se priorizará a los beneficiarios de la presente decisión. g) Al MINISTERIO DE LA SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL para que en coordinación con la UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS intervenga en la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento de la Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, adscrito al Departamento de Nariño, a fin de implementar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto PAPSIVI de conformidad con lo establecido en los artículos 137 y 138 de la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011 en su artículo 164, efectuado lo cual procederá a incluir a la beneficiaria de la presente decisión junto a su núcleo familiar. i) Al BANCO AGRARIO que incluya de manera prioritaria a los presentes solicitantes en los planes y programas de crédito que ha implementado para atender a la población víctima de desplazamiento forzado. Para efecto de corroborar el cumplimiento de la presente orden, deberá allegar a éste despacho un informe semestral sobre la actividad realizada. **NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. (Firmado) INGRID PAOLA ESTRADA ORDOÑEZ. JUEZA"**

Atentamente,


JAVIER OSWALDO ESTRELLA PAZ
Secretario



**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE PASTO**

Pasto, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014)

Referencia: Proceso de Restitución de Tierras No. 2013 – 00261-00
Solicitante(s): MARTHA ARTURO LOPEZ

Se procede a dictar sentencia dentro del proceso de restitución y formalización de tierras No. 52-001-3121-001-2013-00261-00 presentado por la señora MARTHA ARTURO LOPEZ junto con su núcleo familiar.

I. ANTECEDENTES

1ª DE LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN

La señora MARTHA ARTURO LOPEZ junto con su familia conformada actualmente por su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ y sus tres hijas CAMILA, INGRID ESTEFANIA y DAHIANA DEL PILAR PAZ ARTURO, actuando a través de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL EN GESTIÓN EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE (en adelante la UAEGRTD o la Unidad de Restitución de Tierras), Dirección Territorial Nariño, interpusieron la presente solicitud de restitución y formalización de tierras para que en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se hagan los siguientes pronunciamientos:

1.1. PRETENSIONES PRINCIPALES:

- a.-** Que se proteja el derecho fundamental a la restitución de tierras de la reclamante y su familia en su condición de víctimas del conflicto armado, de conformidad con lo establecido en la sentencia T-821 de 2007.
- b.-** Declarar que la solicitante y su compañero permanente han demostrado tener la OCUPACIÓN y en consecuencia ordenar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER la adjudicación en su favor de un predio rural denominado "LA PEDREGOSA" con un área de dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m²) registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25630 e identificado con la cédula o número catastral 52-258-00-01-0003-0114-000 ubicado en la Vereda Pitalito Alto en el corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez, alinderadas de acuerdo al informe técnico predial anexo a la demanda.
- c.-** Ordenar la actualización de los registros cartográficos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, atendiendo la individualización e identificación del predio, según se establezca en sentencia.
- d.-** Que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto la inscripción de la sentencia que reconozca el derecho fundamental a la restitución de tierras, así como la cancelación de todo antecedente registral, gravamen y limitaciones de dominio, título de tenencia, arrendamiento, falsas tradiciones y medidas cautelares registradas con posterioridad al abandono, y la cancelación de los correspondientes asientos registrales a favor de terceros ajenos a la solicitante y su familia.
- e.-** Ordenar a las entidades competentes la implementación de todas las medidas necesarias para la restitución del predio "LA PEDREGOSA" con acompañamiento estatal bajo criterios de seguridad y dignidad.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

- f.- Ordenar a la Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez dar cumplimiento al acuerdo No. 22 del 15 de agosto de 2013, por el cual se estableció la condonación y exoneración del impuesto predial y otras contribuciones a favor de los predios restituidos en el marco de la ley 1448 de 2011.
- g.- Ordenar al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión UAEGRTD adelantar las gestiones necesarias para lograr el alivio de cartera asociada al predio objeto de restitución con empresas de servicios públicos y entidades financieras.
- h.- Ordenar la asignación de los programas de subsidio de vivienda rural, subsidio integral de tierras, proyectos productivos, programas de salud, educación y todos los demás aplicables a la población víctima, a cargo del Banco Agrario de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o cualquier otra entidad pública de cualquier orden.
- i.- Ordenar a las entidades financieras relacionadas en la ley 1448 de 2011 que ofrezcan y garanticen a favor de la solicitante mecanismos para financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva en el predio objeto de restitución.
- j.- Ordenar a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas territorial Nariño, que incluya a los solicitantes señores MARTHA ARTURO LOPEZ y MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ junto con su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas RUV, por el hecho de desplazamiento forzado de la vereda expulsora Pitalito Alto del municipio de El Tablón de Gómez (N).

1.2. PRETENSIONES COMPLEMENTARIAS

Así mismo, la parte actora solicitó como consecuencia de lo anterior, la aplicación de las órdenes necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas, contempladas en el literal "p" del artículo 91 de la ley 1448 de 2011, entre las que se encuentran la formulación e implementación del plan de retorno del desplazamiento forzado ocurrido en 2003 en la Vereda Pitalito Alto, del Corregimiento de La Cueva del Municipio de El Tablón de Gómez; la puesta en marcha del programa de empleo rural y urbano a que se refiere el artículo 67 del Decreto 4800 de 2011 para la población víctima del desplazamiento en el municipio de El Tablón de Gómez, la implementación del programa de empleo y emprendimiento Plan de Empleo Rural y Urbano contemplado en el artículo 68 ibídem; la realización de un estudio de las necesidades de niños(as) jóvenes y adolescentes, priorizando la implementación de la estrategia "De cero a siempre"; la gestión de recursos para el saneamiento básico y sistema de alcantarillado; la implementación de proyectos productivos sustentables en el predio objeto de solicitud; la implementación y financiación de proyectos de sistemas de riego; la aplicación de los beneficios para mujeres rurales; aplicación del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto – PAPSIVI y; el diseño e implementación de mecanismos para financiar actividades tendientes a la recuperación de la capacidad productiva.

Como pretensión subsidiaria se plantea la compensación y la entrega al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras el bien inmueble cuya restitución sea imposible.

1.3. SUSTENTO FÁCTICO:

Los hechos relevantes en que la accionante funda sus pretensiones, esta Judicatura los compendia así: Señala la solicitud que para la época en que ocurrió el desplazamiento, el núcleo familiar de la señora MARTHA ARTURO LOPEZ estaba conformado por su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ y su hija CAMILA PAZ ARTURO. Aclara que



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

actualmente lo componen los mismos miembros, más sus dos hijas INGRID ESTEFANIA y DAHIANA DEL PILAR PAZ ARTURO.

Relata la demanda que, de acuerdo a la información comunitaria e institucional recolectada, en el año 2003 ocurrieron enfrentamientos entre el Ejército Nacional y miembros de la guerrilla de las FARC en la vereda Pitalito Alto, entre otras, del Municipio de El Tablón de Gómez desde el 10 de abril de ese año y durante dos semanas continuas, lo cual causó el desplazamiento masivo de la población en grupos de familias, entre los que se cuenta a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su familia.

Aclara la solicitud que a la fecha no existe por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (en adelante Unidad de Víctimas o UARIV) reconocimiento de la condición de desplazados de la solicitante y su familia por los hechos ya comentados, puesto que no han declarado ante ninguna autoridad para tal fin.

Se afirma que la reclamante viene ocupando el inmueble objeto del presente proceso con su familia desde que su compañero permanente el señor MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ lo compró al señor LUIS ALFONSO CHAVEZ URBANO, negocio que se hizo constar en documento privado del 20 de junio de 1997, el cual no fue registrado. La demanda señala que el predio se encuentra identificado con el número predial 52-258-00-01-0003-0114-000 el cual no reporta antecedente registral, por lo cual se asumió que se trataba de un bien baldío. Se afirma que se encuentran demostrados los elementos para acceder a la adjudicación por parte de INCODER y que sobre el inmueble reclamado no pesa limitación o restricción alguna.

Relata la demanda que los profesionales del área social de la UAEGRTD han logrado detectar situaciones a nivel individual y comunitario, que permiten establecer la calidad de víctima de la solicitante, así como las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra.

Con fundamento en lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión en Restitución de Tierras Despojadas, adelantó la etapa administrativa correspondiente. El trámite administrativo culminó con la inclusión en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del terreno denominado LA PEDREGOSA, señalando una relación jurídica de OCUPACIÓN.

2ª. TRÁMITE PROCESAL

2.1. La solicitud fue recibida y radicada por esta Judicatura el día 16 de diciembre de 2013, la cual fue inadmitida mediante interlocutorio del día 15 de enero de 2014, concediendo el término de cinco (5) días a la parte solicitante para que subsane las falencias anotadas. Dentro del lapso otorgado, la apoderada de la señora MARTHA ARTURO LOPEZ presentó escrito mediante el cual subsanó la demanda en la forma requerida, por lo cual por auto del 7 de febrero de 2014 se admitió la demanda ordenando las actuaciones consecuenciales; así como la vinculación oficiosa del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER para que se pronuncie frente a la demanda, por cuanto las pretensiones se dirigen a la adjudicación de un predio baldío.

2.2. En el auto admisorio, esta judicatura ordenó la publicación a que alude el lit. e) del art. 86 de la ley 1448 de 2011 en donde se hizo el llamamiento en general a todas las personas que consideren tener derechos legítimos sobre el bien o quienes se consideren afectados con el trámite de la referencia, al no encontrarse terceros determinados cuyos intereses se podían ver comprometidos con las resultas del proceso.

2.3. Surtido el trámite de la publicación, se procedió a abrir el respectivo periodo probatorio por 30 días, mediante auto del 28 de marzo de 2014, en donde se solicitó el traslado de varias piezas procesales que obran en otros procesos de restitución adelantados en este Juzgado, teniendo en cuenta que se trata de documentos relativos a la atención a la



Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto

población víctima del conflicto; se decretó el interrogatorio de parte a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ pedido por el Ministerio Público, así como el interrogatorio de su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ para ser surtido a través de comisión al Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez; también se ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras la presentación de un dictamen y la medición de los otros predios pertenecientes a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ.

2.4. Una vez recaudados todos los medios de prueba decretados, se dio cuenta del asunto para que pase a la mesa de la señora Jueza para su estudio y posterior decisión.

Revisadas las actuaciones surtidas en el trámite de la instancia, sin encontrar vicios que tengan la capacidad de invalidar lo actuado, este Despacho procede a emitir la decisión de fondo que fuere del caso, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

1ª. PRESUPUESTOS PROCESALES

En el caso *sub examine* se encuentran cumplidos a cabalidad los requisitos para la conformación válida de las relaciones jurídico procesales, pues la solicitud fue presentada con observancia de las exigencias contempladas en la normatividad aplicable a la materia. De acuerdo con el inciso 2º del art. 79 de la ley 1448 de 2011, el Despacho es competente para fallar el asunto en única instancia, teniendo en cuenta que no fueron reconocidos opositores dentro del trámite. Por su parte, la solicitud bajo estudio cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la ley en cita, al haber sido acompañada de la constancia de inscripción del predio solicitado en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas y finalmente la accionante y su núcleo familiar tienen capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, al tratarse de personas naturales quienes acudieron ante esta instancia con la mediación de apoderada judicial designada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

2ª. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA DE LA RECLAMANTE Y SU NÚCLEO FAMILIAR

La institución de la legitimación en la causa es una cuestión de derecho sustancial que establece la identidad del demandante con aquella que la ley reconoce como titular del derecho pretendido.

Para los asuntos de restitución de tierras, de acuerdo con el art. 81 *ejusdem* se encuentran legitimadas por activa aquellas personas que sean consideradas víctimas de acuerdo a la definición contemplada en el art. 3º de la ley 1448 de 2011 y que hayan sido inscritas en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, previo el agotamiento del trámite administrativo ante la UAEGRTD.

Para el caso bajo estudio, la Unidad de Restitución de Tierras tuvo por acreditado que MARTHA ARTURO LOPEZ, su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ y su hija CAMILA PAZ ARTURO, ostentan la condición de víctimas del conflicto armado interno habida cuenta que se vieron en la necesidad de abandonar sus tierras por los hechos ocurridos en el mes de abril de 2003 en la Vereda Pitalito Alto, Corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez en Nariño.

Para acreditar dicha condición, con la solicitud de restitución y formalización presentada a través de la Unidad de Restitución de Tierras, se anexaron los siguientes documentos: (i) constancia secretarial proferida por la UAEGRTD e



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

impresión de consulta en la base de datos VIVANTO en donde la solicitante NO se encuentra registrada (f. 17 a 19, cuaderno 1); **(ii)** documento titulado "INFORME DE TESTIGOS PITALITO ALTO Y BAJO" elaborado por la UAEGRTD (fs. 20 a 38, c.1); **(iii)** formulario titulado "FORMATO ANÁLISIS DE CONTEXTO DE SOLICITUD" de la UAEGRTD (fs. 39 a 44, c.1); **(iv)** diligencia de ampliación de declaración de la solicitante MARTHA ARTURO LOPEZ ante la UAEGRTD (fs. 47 a 50); **(v)** Declaraciones rendidas ante los profesionales de la UAEGRTD de los señores ELISA CHICUNQUE MUÑOZ (fs. 51 a 53) y EDILMA ADARME JURADO (fs. 54 a 56); **(vi)** constancia de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del predio "LA PEDREGOSA" (f. 80); **(vii)** oficio remitido por el señor Director de la UAEGRTD Territorial Nariño por el cual remite los documentos elaborados por el área social de dicha entidad (fs. 84-85 y CD).

De estos documentos merece destacarse el contenido del "Informe No. 004 del contexto del conflicto armado en el corregimiento La Cueva Vereda Pitalito Alto del Municipio de Tablón de Gómez" realizado por los profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras quienes respecto a los hechos de violencia que dieron origen a la condición de víctimas precisaron:

"Según el informe obtenido por el Ejército Nacional, Batallón de Infantería número nueve "Batalla de Boyacá" el grupo guerrillero de las FARC se vislumbraba en aquella época como un bastión fortalecido tanto en miembros como en armamento y exponiendo de manera permanente la vida de los pobladores y su comunidad en general.

El 10 de abril de 2003 y con la puesta en marcha del plan de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe en ese entonces, llega el puesto de la Policía y también el Ejército Nacional. Esta situación ya había sido prevista por los cabecillas del grupo guerrillero, decidiendo tomar resistencia antes de su desalojo forzoso y por las vías de hecho...

...Días después, la carretera se encontraba ya preparada con una cadena de artefactos explosivos que estaban dispuestos para la bienvenida del ejército, entonces, la guerrilla provocaba con acciones e incitaba a que los soldados y policías transitaran el camino para su detonación, no obstante, estos ya habían sido alarmados del riesgo por la misma población y no cayeron en la trampa. Posterior a los enfrentamientos suscitados en Semana Santa, estos artefactos explosivos, fueron detonados controladamente, al parecer por miembros del Ejército Nacional.

Como el combate se hacía entre las montañas, el paisaje quebrado y con curvaturas, lograba dar guarida a los miembros del grupo guerrillero, ya que era un grupo bastante numeroso, fue llamado el avión fantasma para el apoyo en dicho enfrentamiento, atacando desde el aire a los campamentos y sitios donde permanecían escondidos los guerrilleros, los disparos se hacían indiscriminadamente también a la población civil, esta última acción representaría el pico máximo de terror y caos en la comunidad que se sentían desprotegidos dentro de su mismo hogar...

...Fue entonces, cuando los combates se agudizaron prologándose por dos semanas más, el tiempo en el cual las familias lograban desplazarse con suma cautela, pues lo hicieron en el mismo momento del enfrentamiento, exponiéndose en medio del fuego cruzado y avanzando por etapas hacia las veredas aledañas, buscando refugio en casa de familiares o amigos que pudiesen socorrerlos." (Pág. 14; CD folio 85, cuaderno 1).



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

Adicionalmente, en la demanda obra interrogatorio de parte rendido por la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ, prueba surtida a través de comisión al Juzgado Promiscuo Municipal de El Tablón de Gómez, en donde ambos reiteraron su versión frente a los hechos de desplazamiento. La solicitante aclara en sus declaraciones que para el momento de ocurrencia del desplazamiento estaba embarazada de su segunda hija INGRID ESTEFANIA PAZ ARTURO.

De esta manera, se tiene plena convicción de la calidad de víctimas de la solicitante MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar, pues las pruebas documentales y testimoniales dan cuenta de que la reclamante sufrió los problemas y flagelos que la Unidad de Restitución de Tierras detectó que han padecido los habitantes de la zona por el accionar de los grupos armados ilegales, quienes se desplazaron buscando proteger su vida y la integridad de su núcleo familiar, incluso bajo el riesgo de perder para siempre el patrimonio al que han dedicado tanto esfuerzo y trabajo. Por esta razón se ordenará a la Unidad para la atención y reparación integral a víctimas (en adelante UARIV o Unidad de Víctimas) que procedan a inscribir a la solicitante y su familia como víctimas de desplazamiento forzado por los hechos de violencia ocurridos en la vereda Pitalito Alto y otras veredas del corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez (Nariño) desde el 10 de abril de 2003.

Cabe advertir que si bien no se presentó el fenómeno del despojo del predio por parte de dicho grupo armado, resulta incontrovertible el hecho de que esa cuadrilla tenía influencia en los habitantes del sector en aquella época, pues su intención era la de instalarse en la zona y ratificarse como un factor de poder para ejercer sus actividades ilícitas, por lo cual la solicitante y su compañero permanente se convirtieron en víctimas del conflicto armado, en el marco de un fenómeno de desplazamiento masivo y no se puede desconocer que por esa razón tuvieron que pasar muchas penurias y necesidades que les han impedido estabilizarse completamente en su lugar de origen.

Dicho en otros términos, jurídicamente estamos frente al fenómeno denominado **abandono forzado de tierras**, previsto en el inciso segundo del artículo 74 de la Ley 1448 de 2011 y recogido por la decisión de constitucionalidad condicionada que estableció la Corte Constitucional en sentencia C-715 de 2012. Por esta razón, en virtud del principio de progresividad, se debe comprometer a las entidades involucradas en el programa de la Restitución de Tierras para que asuman el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas para que estos hechos lamentables no vuelvan a repetirse.

3ª.- LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, LA LEY DE VÍCTIMAS Y LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Siendo que se ha reconocido que la solicitante y su familia son víctimas de desplazamiento forzado, resulta oportuno traer a colación algunas reflexiones respecto al tema, antes de entrar a resolver de fondo el asunto de la referencia.

El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas poblacionales. La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional la ha calificado como: "(a) 'un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado' [1]; (b) 'un verdadero estado de emergencia social', 'una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas' y 'un serio peligro para la sociedad política colombiana' [2]; y, (c) un 'estado de cosas inconstitucional' que 'contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo', al causar una 'evidente tensión entre la

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero (...).

² Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.



Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto

*pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos' [3] [4]."*⁵

También ha resaltado dicha Corporación que, por las circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas – en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad – que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio nacional” para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.

Estas reflexiones dieron lugar a que la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004⁶, después de examinar la línea jurisprudencial sobre esa problemática, declarara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado. Para superar dicha situación el Alto Tribunal impartió al gobierno nacional una serie de órdenes.

En el mismo sentido, en la sentencia T-821 de 2007 precisó cuáles eran las obligaciones del Estado y las autoridades públicas frente a las víctimas del conflicto armado en Colombia y reconoció el derecho a la restitución de la tierra como un derecho fundamental de las personas en situación de desplazamiento forzado, en los siguientes términos:

“(…) 60. Las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado y que han sido despojadas violentamente de su tierra (de la tierra de la cual son propietarias o poseedoras), tienen derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de la misma en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. En efecto, en estos casos el derecho a la propiedad o a la posesión adquiere un carácter particularmente, reforzado, que merece atención especial por parte del Estado[7].”

³ Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia T-215 de 2002. MP Jaime Córdoba Triviño.

⁴ Sentencia T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

⁵ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-919 de 2006. M. P.

⁶ Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinoza

⁷ En este sentido la Corte ya ha afirmado lo siguiente: “5 3 3 Finalmente, no observa la Corte que se haya demostrado que el diseño de la política de atención a los desplazados tenga en cuenta su condición de víctimas del conflicto armado, la cual les confiere derechos específicos, como lo son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para el caso específico de las personas víctimas del desplazamiento forzado, estos derechos se manifiestan, igualmente, en la protección de los bienes que han dejado abandonados, en particular de sus tierras – componente de protección que no ha sido resaltado con suficiente fuerza por las entidades que conforman el SNAIPD”. (Auto 218 de 2006). En idéntico sentido en la Sentencia T – 1037 de 2006, dijo la Corte: “Con todo, esta Corporación considera que el hecho de que el señor Quintero Durán se haya visto obligado a abandonar los inmuebles de su propiedad, víctima de la violencia, le confiere el derecho a que los mismos sean amparados hasta tanto él se halle en condiciones de hacerse cargo, a fin de evitar actos que recaigan sobre estos. Por tal razón, estima que al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- y a la Alcaldía del municipio de Ocaña les corresponde adelantar las gestiones tendientes a garantizar la protección referida”. En consecuencia, la Corte decidió Ordenar: “TERCERO - ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER- que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, inicie las gestiones necesarias a fin de inscribir los predios rurales de propiedad del ciudadano Fernando Quintero Durán en el Registro Único de Predios Rurales Abandonados –RUP. Dicha inscripción deberá realizarse dentro de un término máximo de cinco (5) días, a partir de la ejecución de los trámites necesarios.”



Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto

“Ciertamente, si el derecho a la reparación integral del daño causado a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, es un derecho fundamental, no puede menos que afirmarse que el derecho a la restitución de los bienes de los cuales las personas en situación de desplazamiento han sido despojadas, es también un derecho fundamental. Como bien se sabe, el derecho a la restitución es uno de los derechos que surgen del derecho a la reparación integral. En este sentido es necesario recordar que el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949^[8] y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas^[9] (los llamados principios Deng), y entre ellos, los Principios 21, 28 y 29^[10] 85 y los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las Personas desplazadas, hacen parte del Bloque de constitucionalidad en sentido lato, en tanto son desarrollos adoptados por la doctrina internacional, del derecho fundamental a la reparación integral...”.

En cumplimiento de dichos fallos, el legislador profirió la Ley 1448 de 2011, por la cual se establecen las medidas para la **“atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”**. La norma en comento fija un marco de justicia transicional, buscando beneficiar a las personas que se encuadran dentro del concepto de **“víctimas”** fijado por el art. 3º de la misma ley, teniendo en cuenta el estado de vulnerabilidad en que se encuentran y la necesidad de adoptar acciones positivas encaminadas al efectivo goce de sus derechos.

Así mismo, la ley parte del reconocimiento de la dignidad de todas las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado interno. Partiendo de este reconocimiento, se consagraron en el artículo 73 varios principios, todos en favor de la víctima, entre los que se cuentan la prevalencia constitucional de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, la progresividad por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; y la estabilización, es decir el derecho de las víctimas al retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad.

Ahora bien, dicha normatividad incluye preceptos del Derecho Internacional, por lo cual debe ser interpretada armónicamente, entre otros con los **“Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas”** también conocidos como **Principios Pinheiro**, acogidos mediante Resolución No. 2004/2 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con lo previsto entre otras en la sentencia T-068 de 2010 de la Corte

⁸ “Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.

⁹ Naciones Unidas, Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Sr. Francis Deng.

¹⁰ Los Principios 21, 28 y 29 de los principios rectores mencionados señalan:
Principio 21.- 1. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones. 2. La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán de protección en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes: a) expolio; b) ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; c) utilización como escudos de operaciones u objetos militares; d) actos de represalia; y e) destrucciones o expropiaciones como forma de castigo colectivo. 3. La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales.
Principio 28. - 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que hayan regresado o se han reasentado en otra parte. 2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.
Principio 29. - 1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos. 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan.



Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto

Constitucional¹¹. Entre dichos principios merecen destacarse el Derecho a la restitución de las viviendas y el patrimonio (2); Derecho a la protección contra el desplazamiento (5); Derecho a un disfrute pacífico de los bienes (7); y el Derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad (10).

La misión de la ley de víctimas se centra en la reparación integral, considerada un derecho de las víctimas y que se compone de los siguientes elementos fijados por el mismo precepto normativo: **(i)** restitución, **(ii)** indemnización, **(iii)** rehabilitación, **(iv)** medidas de satisfacción y **(v)** garantías de no repetición. Estos elementos involucran el actuar de una serie de entidades públicas y privadas, con una dimensión reparadora tanto individual como colectiva.

La restitución de tierras es el pilar fundamental de esta normatividad, la cual comprende la concreción de varias medidas de índole constitucional y legal para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el art. 3º de la ley 1448 en cita¹².

Se tiene entonces que para acceder a las medidas de reparación integral contempladas en la pluricitada norma, a través del proceso judicial de restitución y formalización de tierras previsto en la ley 1448 de **2011 resulta imprescindible acreditar la calidad de víctima, en los términos fijados en el art. 3º ídem**, y además que se haya surtido el trámite administrativo ante la UAEGRTD, el cual culmina con la inclusión en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente, requisitos que en el caso bajo estudio, como ya se precisó en acápites anteriores, se encuentran plenamente cumplidos y soportados en el acervo probatorio que obra en el expediente.

4a. PROBLEMAS JURÍDICOS

Entonces, habiéndose establecido que la reclamante y su núcleo familiar ostentan la condición de víctimas al tenor de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, en el asunto que compromete la atención de esta judicatura corresponde determinar: **¿Qué acciones de reparación integral proceden de acuerdo a lo acreditado por la parte solicitante?** Y finalmente se establecerán **¿Cuáles serían las medidas aplicables en este caso para efectos de garantizar la no repetición de los hechos que dieron lugar al desplazamiento?**

Entonces el Despacho pasará a examinar cada uno de los interrogantes planteados así:

¹¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chajub. Expediente T-2 249.911

¹² "ARTÍCULO 3º. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

PARÁGRAFO 1º. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.

PARÁGRAFO 2º. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.

Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.

PARÁGRAFO 3º. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

PARÁGRAFO 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

PARÁGRAFO 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley."



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

5ª.- ¿QUÉ ACCIONES DE REPARACIÓN INTEGRAL PROCEDEN DE ACUERDO A LO ACREDITADO POR LA PARTE SOLICITANTE?

Tal y como se lo había reseñado renglones arriba, el artículo 69 de la Ley 1448 de 2011 establece cuáles son las medidas de reparación a que tienen derecho las víctimas del conflicto armado, entre las que se cuentan: la restitución, la indemnización (administrativa o judicial), la rehabilitación (física, mental, psicológica, ciudadana y comunitaria), la satisfacción (entre las que se cuentan la reparación simbólica y la exención del servicio militar) y las garantías de no repetición. Cada una de las líneas de acción de la reparación integral busca apoyar a las víctimas, reconociendo la complejidad de su situación, buscando que dicha reparación sea efectiva, adecuada y diferenciada de acuerdo a cada caso.

Según lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 1448 de 2011, las acciones de restitución tendientes a la reparación de las personas despojadas de sus predios o que tuvieron que abandonarlos forzosamente comprenden: **(i)** la restitución material del inmueble, **(ii)** la restitución jurídica del inmueble; y subsidiariamente, en este orden **(iii)** la restitución por equivalente ó **(iv)** el reconocimiento de una compensación cuando la restitución se torna imposible. Se debe pasar a establecer entonces qué acciones (restitución jurídica, restitución material, restitución por equivalente o compensación) proceden en este caso de acuerdo a lo acreditado por la parte solicitante.

5.1. En cuanto a la **RESTITUCIÓN MATERIAL**, es decir la entrega real del bien al solicitante, se tiene que en el presente asunto no resulta necesaria, por cuanto la reclamante ha manifestado en su declaración que ha retornado al predio "LA PEDREGOSA", aun sin acompañamiento ni apoyo institucional y actualmente se encuentra explotándolo. Teniendo en cuenta que no se requiere proferir órdenes frente a la entrega material del inmueble objeto del presente asunto, no se realizarán mayores pronunciamientos respecto a este punto.

5.2. Ahora bien, frente a la **RESTITUCIÓN JURÍDICA** del predio, se tiene que en el trámite administrativo surtido ante la UAEGRTD se ha establecido que el inmueble objeto del proceso de la referencia ostenta la calidad de baldío por no contar con antecedente registral alguno. Por esta razón, resulta oportuno exponer los requerimientos del ordenamiento jurídico civil vigente para solicitar la titulación de tierras con este calificativo.

5.2.1. Presupuestos para la adjudicación de predios con calidad de baldíos: Constitucionalmente los bienes baldíos se encuentran dentro de la categoría de bienes públicos pertenecientes a la Nación, consagrada en el art. 102 de la Carta Política. Ya dentro de la regulación que ofrece la normatividad civil, se tiene que el art. 676 del C.C. señala que los bienes públicos, es decir aquellos cuyo dominio pertenece a la República, se dividen en bienes de uso público y los bienes fiscales, siendo los primeros aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes, como el de calles, plazas, puentes y caminos. Por oposición, los bienes fiscales no corresponden al uso común de los habitantes del territorio, siendo ésta la categoría a la que pertenecen los bienes baldíos. La doctrina y la jurisprudencia han ubicado a los baldíos bajo la categoría denominada "*bienes fiscales adjudicables*", que corresponden a aquellos cuyo dominio tiene la Nación con el fin de traspasarlos a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley¹³. Por su parte, el art. 675 del C.C. define a los baldíos como "*todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño*".

Hecha la anterior precisión, se tiene que los bienes que ostentan la calidad de baldíos se diferencian de los bienes de dominio privado en que los primeros son inembargables, inenajenables e imprescriptibles, por lo cual NO pueden ser adquiridos por el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, pues así lo disponen el art. 3º de la ley 48 de 1882, el art.

¹³ Ver Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 1995 Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ. Expediente No. D-971



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

61 de la ley 110 de 1992 y el art. 65 de la ley 160 de 1994. De acuerdo con esta última norma, los terrenos baldíos solamente se pueden adquirir:

“...mediante título traslativo de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que se delegue esta facultad.

“Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”

Es precisamente la Ley 160 de 1994 la norma encargada de regular lo atiente a la adjudicación de baldíos. En sus artículos 65 y siguientes establece los requerimientos a fin de lograr la adjudicación del inmueble por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER (antes INCORA), los cuales se reducen a los siguientes:

1. Haber ocupado el terreno por espacio no inferior a cinco (5) años;
2. Haberlo explotado económicamente por un término igual al anterior;
3. Que la explotación que se ha adelantado en dichos predios corresponda a la aptitud del suelo, y
4. Que la solicitante no sea propietario o poseedor a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional.¹⁴

De otro lado, conforme con el art. 107 del Decreto 0019 de 2012, que adicionó un Parágrafo al art. 69 de la Ley 160 de 1994:

“En el evento en que la solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Víctimas, podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración de abandono del predio. La ocupación se verificará por el INCODER reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita. En todo caso, la solicitante de la adjudicación deberá cumplir con los requisitos previstos en este artículo relacionados con la aptitud del predio. no acumulación o transferencia de ocupaciones, conservación de zonas ambientales protegidas, extensiones mínimas de adjudicación de islas. playones y madrevejas desecadas de los ríos, lagos y ciénagas de propiedad nacional, y las zonas especiales en las cuales no se adelantarán programas de adquisición de tierras y los demás requisitos que por Ley no están exceptuados para los solicitantes en condición de desplazamiento.”

La Corte Constitucional, al analizar en sentencia de constitucionalidad el contenido de la ley 160 de 1994, resaltó quiénes pueden ser adjudicatarios de predios baldíos y quiénes no, por haber expresa prohibición, tal y como queda sintetizado en el siguiente aparte:

“e.1 Quiénes pueden ser sujetos de adjudicación de tierras baldías.

Al tenor de lo dispuesto en la ley 160 de 1994 los terrenos baldíos podrán ser adjudicados a personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas (art. 65); a las entidades de derecho público, para la construcción de obras de infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos, o cuyas actividades hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública o de interés social, con la condición de que si no se cumple esta finalidad, los predios revertirán al dominio de la Nación; y a las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que presten un servicio público, o tengan funciones de beneficio social por autorización de la ley (art. 69).

¹⁴ Ibidem.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

e.2 A quiénes no se puede adjudicar terrenos baldíos.

Según la ley precitada se prohíbe hacer adjudicaciones a las personas cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos mensuales legales, con excepción de las empresas especializadas del sector agropecuario a que se refiere el capítulo XIII de la misma ley. Tampoco podrán titularse dichas tierras a quienes hubiesen tenido la condición de funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, dentro del término señalado en el artículo 71 ibídem, al igual que las personas jurídicas cuando uno o varios de sus socios hayan tenido las vinculaciones o calidades mencionadas con los referidos organismos”¹⁵

De acuerdo con el art. 66 de la ley 160 de 1994 las tierras baldías deben ser adjudicadas en Unidades Agrícolas Familiares (UAF), cuya extensión mínima y máxima adjudicable debe ser establecida por parte del INCODER. Dichas extensiones ya fueron fijadas por el Instituto en comento, mediante la Resolución No. 041 de 1996, dividiendo al país en “zonas relativamente homogéneas”. El municipio de El Tablón de Gómez, en donde se encuentra localizado el predio objeto de la solicitud de restitución, pertenece a la Regional Nariño-Putumayo y le corresponde la “ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA No. 6. ZONA ANDINA” para la cual se establece: “Unidad Agrícola Familiar: clima frío comprendida entre el rango de 10 a 14 hectáreas. Clima medio comprendida entre el rango de 17 a 24 hectáreas.”

Así mismo, se resalta que la Resolución 041 de 1996 citada en líneas anteriores, en su artículo 27 consagra las excepciones a la regla general de titular las tierras baldías únicamente en UAF, remitiendo al contenido del Acuerdo 014 de 1995 proferido por la Junta Directiva del INCODER, como órgano competente para establecer las áreas mínimas y máximas adjudicables. Por su parte, el Acuerdo 014 de 1995 señala en su art. 1º dichas excepciones, que corresponden a las siguientes:

- 1. Las adjudicaciones de baldíos que se efectúen en las zonas urbanas de los corregimientos, inspecciones de policía y poblados no elevados aún a la categoría administrativa de municipios. El área tituable será hasta de dos mil (2000) metros cuadrados, conforme a lo previsto en el Decreto 3313 de 1965.*
- 2. Cuando se trate de la titulación de lotes de terrenos baldíos en áreas rurales, destinados principalmente a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones agropecuarias anexas, siempre que se establezca por el Instituto que los ingresos familiares del solicitante son inferiores a los determinados para la unidad agrícola familiar.*
- 3. Cuando la petición de adjudicación verse sobre un lote de terreno baldío utilizado para un fin principal distinto a la explotación agropecuaria, cuya extensión sea inferior a la señalada para la unidad agrícola familiar en el respectivo municipio.*
- 4. Las solicitudes de adjudicación que se refieran a terrenos baldíos con extensión inferior a la determinada para la unidad agrícola familiar en el correspondiente municipio, en los que la utilización de una tecnología avanzada; o una localización privilegiada del predio, por la cercanía a vías de comunicación o a centros de comercialización, permita completar o superar los ingresos calculados para la unidad agrícola familiar.*
- 5. Cuando las circunstancias especiales del predio baldío solicitado en adjudicación, relativas a la fisiografía, agrología, ecología y condiciones ambientales en general, indiquen la conveniencia de dedicarlo a explotaciones forestales, agroforestales, silvopastoriles o aprovechamientos con zocriaderos, con el objeto de obtener los ingresos calculados por el INCORA para la unidad agrícola familiar en el respectivo municipio”*

¹⁵ Op. Cit



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

Una vez analizados los requisitos contemplados en la normatividad vigente para acceder a la adjudicación de baldíos, el Despacho considera oportuno advertir que los predios adjudicados quedan sujetos a ciertas prohibiciones consagradas en la ley, consistentes en: **(i)** dentro de los cinco (5) años siguientes a la adjudicación, solamente podrá establecerse gravamen de hipoteca para garantizar obligaciones derivadas de créditos agropecuarios otorgados por entidades financieras (art. 73 ley 160 de 1994); **(ii)** quien siendo adjudicatario(a) de tierras baldías las hubiere enajenado, no podrá obtener una nueva adjudicación antes de transcurridos quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior (inc. 10º art. 72 *ejusdem*).

5.2.2. Caso concreto: Descendiendo al caso bajo estudio se tiene que la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar han solicitado, como parte de sus pretensiones, que se ordene al INCODER la adjudicación de una porción de terreno denominada "LA PEDREGOSA", la cual fue individualizada por parte de la Unidad de Restitución de Tierras encontrando los siguientes datos que aparecen en la constancia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente y los informes de georreferenciación y técnico predial elaborados y presentados ante este Despacho por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas de esta localidad:

DATOS GENERALES "LA PEDREGOSA"

Nombre	LA PEDREGOSA
Matricula inmobiliaria	246-25630 abierto el 31 de octubre de 2013 en cumplimiento de resolución RÑI-461 9/09/13 proferida por la UAEGRTD, a favor de la Nación.
Cédula o código catastral	52-258-00-01-0003-0114-000
Ubicación	Vereda Pitalito Alto Corregimiento de La Cueva Municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño.
Extensión superficial o área total	dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m ²)
Relación de la solicitante con el predio	Ocupación.

CUADRO DE COORDENADAS "LA PEDREGOSA"

PUNTO No.	Coordenadas geográficas		Coordenadas planas	
	Latitud	Longitud	Norte	Este_(m)
1	1° 25' 7,509"N	77° 3' 33,500" W	648645,389	1002025,648
2	1° 25' 7,413"N	77° 3' 33,383" W	648642,455	1002029,269
3	1° 25' 6,583"N	77° 3' 32,116" W	648616,947	1002068,454
4	1° 25' 5,493"N	77° 3' 33,721" W	648583,470	1002018,836
5	1° 25' 6,018"N	77° 3' 33,923" W	648599,612	1002012,579
6	1° 25' 6,184"N	77° 3' 34,361" W	648604,702	1001999,045
7	1° 25' 6,261"N	77° 3' 34,770" W	648607,058	1001986,409
8	1° 25' 6,289"N	77° 3' 35,000" W	648607,907	1001979,305
9	1° 25' 6,807"N	77° 3' 34,862" W	648623,837	1001983,561



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

CUADRO DE COLINDANCIAS “LA PEDREGOSA”

ORIENTACION	PUNTOS	DISTANCIA (m.)	COLINDANTE
NORTE	1 a 2	4,7	JULIO CESAR LOPEZ
	2 a 3	46,8	JOSE DEMETRIO PAZ
ORIENTE	3 a 4	59,9	AURA NUVIA YELA
SUR	4 a 6	31,8	DIEGO EXENOVER BENAVIDES
	6 a 8	20,0	JAIME MARTÍNEZ
OCCIDENTE	8 a 1	63,8	VIA TABLON - APONTE

En la etapa administrativa se estableció que la porción de terreno “LA PEDREGOSA” es un bien baldío por no contar con antecedente registral alguno. Revisado uno a uno los requisitos arriba señalados para acceder a la titulación de baldíos, de acuerdo con las normas citadas en precedencia, se encuentra que hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda relativas a la formalización de la relación jurídica de la parte solicitante con el terreno en mención, pues en primer lugar la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar pueden ser adjudicatarios de baldíos por cuanto son personas campesinas, que no cuentan con un patrimonio que alcance siquiera a acercarse a los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual se deduce de las declaraciones de la solicitante y su compañero permanente, así como la respuesta allegada al expediente por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN (fs. 79, cuaderno 1).

Así mismo, el predio cuya titulación se persigue es susceptible de ser adjudicado, por cuanto si bien no alcanza la extensión fijada para la UAF en la zona, le resulta aplicable la excepción a dicha regla consagrada en el núm. 2º del art. 1º del Acuerdo 014 de 1995, según la cual no se tendrá en cuenta la extensión de Unidades agrícolas familiares para la titulación de terrenos baldíos “cuando se trate de la titulación de lotes de terrenos baldíos en áreas rurales, destinados principalmente a habitaciones campesinas y pequeñas explotaciones agropecuarias anexas, siempre que se establezca por el Instituto que los ingresos familiares del solicitante son inferiores a los determinados para la unidad agrícola familiar”. Este Despacho considera que la norma le resulta aplicable por cuanto se trata de un predio al cual se le ha dado destinación para explotación agrícola de una familia campesina que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado interno, lo que durante mucho tiempo ha evitado su estabilización y ha causado detrimento en su poder adquisitivo.

El informe técnico predial allegado con la demanda, así como las distintas complementaciones requeridas por este Despacho (fs. 95-96, cuaderno 1B; fs. 19 a 22 cuaderno 2) tampoco dan cuenta de la existencia de algún impedimento o restricción ambiental que imposibilite la adjudicación de baldíos por la ubicación del fundo, tales como que se encuentren dentro de áreas pertenecientes a comunidades indígenas o negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras; a parques nacionales naturales; a reservas forestales; que se encuentren en superficies reservadas para fines especiales como explotación de recursos naturales no renovables, en terrenos que tengan el carácter de bienes de uso público, o que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región.

Por su parte, tanto la Vigésima Tercera Brigada del Ejército como el Departamento de Policía de Nariño han remitido informes a este Despacho respecto a la situación actual de seguridad en el municipio de El Tablón de Gómez, los cuales fueron allegados al proceso de la referencia como prueba trasladada del proceso 2013-0080 (ver f. 16, c.2), en los dan cuenta que se han adelantado y se siguen desarrollando acciones para acabar con los hechos de violencia en la región, garantizar la seguridad en el sector y proteger a la población civil y sus bienes, advirtiendo que si bien “no se registran actualmente acciones armadas en el citado municipio” tampoco se descarta la injerencia esporádica de grupos al margen de la ley buscando corredores de movilidad, por la ubicación geográfica del Tablón de Gómez.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

El Despacho también encuentra cumplidos los requisitos generales contemplados en la ley 160 de 1994, como se pasa a explicar a continuación:

a. Haber ocupado el terreno por espacio no inferior a cinco (5) años: la solicitante MARTHA ARTURO LOPEZ, en sus declaraciones rendidas ante los profesionales de la UAEGRTD ha manifestado que ha venido ocupando el predio "LA PEDREGOSA" desde el 20 de junio de 1997, fecha en la que su compañero permanente el señor MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ compró el lote al señor LUIS ALFONSO CHAVES URBANO y se suscribió el documento privado de compraventa y que desde entonces lo viene explotando agrícolamente a través de la siembra de cultivos como café. Para soportar probatoriamente dichas afirmaciones, se han aportado junto con la demanda los siguientes documentos: **(i)** formulario de análisis de contexto de solicitud elaborado por la UAEGRTD (fs. 39 a 44, cuaderno 1); **(ii)** copia de la ampliación de declaración rendida por la solicitante ante la UAEGRTD dentro del trámite administrativo de restitución de tierras (fs. 47 a 50, c.1); **(iii)** copia de las declaraciones rendidas por las señoras ELISA CHICUNQUE MUÑOZ y EDILMA ADARME JURADO ante la UAEGRTD como testigos dentro del trámite administrativo (fs. 51 a 56, c. 1) quienes acreditaron que conocen a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y a su familia y que los vecinos del sector la reconocen como la dueña del fundo llamado "LA PEDREGOSA"; **(iv)** copia del contrato de compraventa del 20 de junio de 1997 por el cual el señor LUIS ALFONSO CHAVES URBANO vende el predio denominado "LA PEDREGOSA" (f. 60, cuaderno 1); **(v)** copia de la cédula cafetera inteligente expedida por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para la señora MARTHA ARTURO LOPEZ (f. 77); estas pruebas dan cuenta del desarrollo de la ocupación por un término superior al ordenado por la norma en cita, acreditándose en forma suficiente el cumplimiento de este requisito.

b. Haberlo explotado económicamente por un término igual al anterior: Las mismas pruebas dejan en evidencia que la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su familia han venido explotando el predio "LA PEDREGOSA" desde que lo adquirieron mediante compraventa informal, destinándolo para explotación agrícola.

c. Que la explotación que se ha adelantado en dichos predios corresponda a la aptitud del suelo: Se tiene por cumplido este requisito con la complementación al Informe Técnico Predial presentado por la UAEGRTD por requerimiento de este Despacho, en el cual, luego de exponer los usos permitidos del suelo de acuerdo a su ubicación, se concluye claramente:

"También se concluye que no se presenta conflicto en el uso del suelo que se desarrolla en el predio LA PEDREGOSA de MARTHA ARTURO LÓPEZ, localizado al interior de la Zona de Desarrollo Agropecuario Medio, Zona Silvo-pastoriles (DAM1), ya que no presenta un uso que vaya en contravía de lo reglamentado para esta zona de conformidad con lo establecido en el POT" (f. 20, cuaderno 2).

De esta manera, se tiene que el uso que le venía dando la señora MARTHA ARTURO LOPEZ al predio que pretende formalizar corresponde al uso adecuado establecido por la autoridad competente.

d. Que la solicitante no sea propietaria o poseedora a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional: Antes de abordar el cumplimiento de este requerimiento resulta oportuno realizar algunas aclaraciones frente al tema. Debido a las condiciones y dinámicas propias del sector rural, se ha aceptado por parte del INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER la adjudicación de más de una porción de terreno a familias campesinas de bajos recursos, con fundamento en las excepciones arriba reseñadas del núm. 2º del art. 1º del Acuerdo 014 de 1995, siempre y cuando las porciones de terreno adjudicadas, al sumarse no hayan superado el límite de la UAF, señalado como el tope máximo para acceder a bienes de la Nación, resultando en que una misma persona ha sido beneficiaria de adjudicaciones de baldíos en más de una ocasión, mediante resolución en firme e inscrita.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

El Despacho acoge esta interpretación y la hará suya en el caso bajo estudio, pues se acepta que es posible armonizar la prohibición de poseer o ser propietario de otros predios rurales con los preceptos de la Constitución y con los principios contenidos en la misma ley 160 de 1994 y en la ley 1448 de 2011, siguiendo los criterios expuestos por la Corte Constitucional¹⁶, pues no resulta acorde a los criterios de la justicia agraria y transicional que se aplique de manera tajante la mencionada prohibición cuando se está ante una familia campesina de bajos recursos que sólo ha podido acceder a un pedazo de tierra que no garantiza su adecuado desarrollo económico, conminando al solicitante y a su núcleo familiar a permanecer en la pobreza.

En este caso la señora MARTHA ARTURO LOPEZ ha manifestado en sus declaraciones que tiene en total dos predios, denominados "EL AGUACATE" y "LA PEDREGOSA" este último objeto de las pretensiones del proceso de la referencia. La respuesta allegada por INCODER (f. 42 cuaderno 2) y las impresiones de las consultas en el "SIR" de la Superintendencia de Notariado y Registro (fs. 97 a 100, cuaderno 1B) permiten concluir que la solicitante y su compañero permanente no ostentan la propiedad de ningún predio. Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras ha informado a este Despacho que ambos predios tienen solicitudes de restitución de tierras vigentes, en los cuales se ha verificado que poseen las siguientes áreas:

NOMBRE DEL PREDIO	AREA (Has.)
AGUACATE	0,0515
LA PEDREGOSA	0,2733
	0,3248

Como ya se precisó en líneas anteriores, la UAF para el municipio de El Tablón de Gómez está establecida "...entre el rango de 17 a 24 hectáreas" por lo cual la porción de terreno que se pretende formalizar por medio del proceso de la referencia, ni aún sumada a todos los bienes inmuebles sobre los cuales ejerce posesión, se alcanza a acercar siquiera al límite máximo de la UAF establecido por la ley 160 de 1994.

Al encontrarse cumplidos los requerimientos para acceder a la titulación de un predio baldío, este Despacho concederá las pretensiones relativas a la restitución jurídica o formalización de la relación jurídica del predio "LA PEDREGOSA", ordenando al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER que adjudique en favor de la señora MARTHA ARTURO

¹⁶ "El latifundio y el minifundio, como se ha advertido antes, están reconocidos como sistemas de tenencia y explotación de las tierras propios de una defectuosa estructura de la propiedad agraria, que contradicen los principios políticos que informan el Estado Social de Derecho, en la medida en que se engenan como obstáculos del desarrollo económico y social del campo, bien porque concentra la propiedad y los beneficios que de ella se derivan, o bien porque se atomiza su explotación, con el resultado de un bajo rendimiento económico, que coloca al productor apenas dentro de unos niveles de subsistencia.

(...) 2.5. En relación con los cargos de inconstitucionalidad que el demandante hace al inciso 9 del art. 72, estima la Corte, que dicho texto normativo no contradice, sino que por el contrario se aviene con los preceptos de la Constitución, por las siguientes razones:

- En la Constitución de 1991 se mantuvo el sentido prescriptivo del artículo 76-21 de la Carta de 1886 en el sentido de que el legislador está autorizado para "dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías". En tal virtud, en desarrollo de dicha atribución le es dado regular lo relacionado con la forma como se adquiere la propiedad de los baldíos, las limitaciones a su adjudicación, las restricciones que reclaman su disposición o enajenación una vez adjudicados, los procedimientos administrativos a través de los cuales se hacen efectivas tales limitaciones o restricciones y, en general, las cargas a las cuales puede someterse su aprovechamiento económico, con el fin de lograr los objetivos sociales y económicos a los cuales se hizo alusión anteriormente.

La adquisición de los baldíos, según se deduce de la preceptiva de la ley 160/94, se obtiene mediante la ocupación, caracterizada como un aprovechamiento económico, y con el reconocimiento que de ésta hace el Estado a través del acto administrativo de adjudicación.

Consecuente con este criterio la Corte expresó:

"la adjudicación de terrenos de propiedad de la Nación, concretamente de baldíos, tiene como objetivo primordial, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella, pues es requisito indispensable, según la ley acusada, que el presunto adjudicatario no posea otros bienes rurales, ni tenga ingresos superiores a mil salarios mínimos mensuales (arts. 71 y 72 ley 160/94), como también contribuir al mejoramiento de sus recursos económicos y, obviamente, elevar su calidad de vida"¹⁷.

- La limitación introducida por la norma acusada sobre el tamaño transferible de la propiedad originada en una adjudicación de baldíos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenación. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, amparada como se dijo en la previsión del art. 150-18 y en la persecución de los fines constitucionales de lograr el acceso de los campesinos a la propiedad rural, el de limitar la adjudicación de baldíos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del Incoira, a una unidad de explotación económica denominada UAF (ley 160/94 art. 66). Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios... con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos" (art. 64 C.P.) (subrayado fuera del texto).

Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los baldíos, o la que se deriva de un título de adjudicación de baldíos a una UAF, como lo prevé el acapite normativo acusado, más posibilidades tendrá el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor número de campesinos; aparte de que se logrará el efecto benéfico de impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico." Corte Constitucional. Sentencia C-536-97 M.P. Antonio Barrera Carbonell.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

LOPEZ y su compañero permanente MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ, el inmueble inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, individualizado en líneas anteriores, con una cabida superficial de dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m²) registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria 246-25630 e identificado con el número predial 52-258-00-01-0003-0114-000 ubicado en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño. Una vez proferido el acto administrativo de adjudicación, el INCODER deberá notificar del mismo a la solicitante y su núcleo familiar, así como a este Despacho y deberá proceder a inscribirlo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño).

Se ordenará la adjudicación en favor de la solicitante y del señor MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ, atendiendo el mandato legal contenido en el par. 4º art. 91 ley 1448 de 2011, según el cual "El título del bien deberá entregarse a nombre de los dos cónyuges o compañeros permanentes, que al momento del desplazamiento, abandono o despojo, cohabitaban, así al momento de la entrega del título no están unidos por ley". (Subrayado fuera de texto).

6º. DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIZACIÓN Y LA NO REPETICIÓN DE LOS HECHOS QUE DIERON LUGAR AL DESPLAZAMIENTO

Sobre este aspecto, se hace necesario para efectos de que se le garantice el ejercicio y goce de los derechos reconocidos a la solicitante y a su grupo familiar en virtud de la restitución, tomar las decisiones encaminadas a la no repetición de los hechos generadores de violencia.

En el plenario se han trasladado varios informes por parte de las entidades involucradas, quienes han puesto en conocimiento de este Juzgado los programas y planes generales y específicos que tienen para efectos de hacer efectiva la atención a la población que habita en el corregimiento de La Cueva del municipio de Tablón de Gómez, los cuales obran en el cuaderno de pruebas, bajo ese entendido se generarán las órdenes que se consideran pertinentes, su implementación se hará conforme las condiciones así lo permitan, no sin antes advertir que la incorporación de las víctimas a los diferentes planes y programas previstos por el Estado si bien se supeditan a la gradualidad y al cumplimiento de requisitos legales y administrativos, para ellas debe garantizarse su priorización de acuerdo con los parámetros de enfoque diferencial.

Igualmente esta Judicatura tomará las decisiones tendientes a garantizar los derechos de restitución que le incumben a la solicitante con su núcleo familiar y adicionalmente, como parte del enfoque diferenciado de género, se ordenará a la Unidad de Restitución de Tierras, haciendo parte del Ministerio de Agricultura, priorice la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002 a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar, como mujer rural favorecida con el proceso de restitución, en los términos del artículo 117 de la Ley 1448 de 2011.

Por último, antes de proferir las órdenes pertinentes a la restitución jurídica del predio solicitado, esta Judicatura destaca del cuerpo de la acción invocada el acápite denominado pretensiones subsidiarias, las cuales por su contenido y naturaleza no pueden coexistir al interior del escrito analizado, pues las mismas por su origen requieren el cumplimiento de una serie de condiciones que no se han acreditado en el plenario y que deben ser el resultado de la manifestación inequívoca de la voluntad del solicitante, razón por la cual esta Judicatura llama la atención de la UAEGRD a fin de que al invocar tales pretensiones observe lo previsto en la Ley; no siendo procedente entonces pronunciarse sobre este particular, máxime cuando han prosperado las pretensiones principales.

En consecuencia, **EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE PASTO**, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

RESUELVE

PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental a la restitución de tierras de la señora **MARTHA ARTURO LOPEZ**, su compañero permanente **MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ**, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 27.189.859 y 5.246.394 respectivamente y su núcleo familiar al momento del desplazamiento, frente a la porción de terreno inscrita en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente denominada "LA PEDREGOSA", registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25630 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), identificada con el número catastral 52-258-00-01-0003-0114-000 ubicado en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño.

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural **INCODER** que dentro del plazo máximo de dos (2) meses siguientes a la notificación de ésta providencia, adjudique en favor de la señora **MARTHA ARTURO LOPEZ** y su compañero permanente **MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ**, identificados con las cédulas de ciudadanía No. 27.189.859 y 5.246.394 respectivamente, la porción de terreno inscrita en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente denominada "LA PEDREGOSA" con un área total de dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m²), por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para tal fin, cuyos datos de individualización se resumen en los siguientes cuadros:

DATOS GENERALES "LA PEDREGOSA"

Nombre	LA PEDREGOSA
Matricula inmobiliaria	246-25630 abierto el 31 de octubre de 2013 en cumplimiento de resolución RÑI-461 9/09/13 proferida por la UAEGRD, a favor de la Nación.
Cédula o código catastral	52-258-00-01-0003-0114-000
Ubicación	Vereda Pitalito Alto Corregimiento de La Cueva Municipio de El Tablón de Gómez, Departamento de Nariño.
Extensión superficial o área total	dos mil setecientos treinta y tres metros cuadrados (2.733 m ²)

CUADRO DE COORDENADAS "LA PEDREGOSA"

PUNTO No.	Coordenadas geográficas		Coordenadas planas	
	Latitud	Longitud	Norte	Este_(m)
1	1° 25' 7,509"N	77° 3' 33,500" W	648645,389	1002025,648
2	1° 25' 7,413"N	77° 3' 33,383" W	648642,455	1002029,269
3	1° 25' 6,583"N	77° 3' 32,116" W	648616,947	1002068,454
4	1° 25' 5,493"N	77° 3' 33,721" W	648583,470	1002018,836
5	1° 25' 6,018"N	77° 3' 33,923" W	648599,612	1002012,579
6	1° 25' 6,184"N	77° 3' 34,361" W	648604,702	1001999,045
7	1° 25' 6,261"N	77° 3' 34,770" W	648607,058	1001986,409
8	1° 25' 6,289"N	77° 3' 35,000" W	648607,907	1001979,305
9	1° 25' 6,807"N	77° 3' 34,862" W	648623,837	1001983,561



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

CUADRO DE COLINDANCIAS “LA PEDREGOSA”

ORIENTACION	PUNTOS	DISTANCIA (m.)	COLINDANTE
NORTE	1 a 2	4,7	JULIO CESAR LOPEZ
	2 a 3	46,8	JOSE DEMETRIO PAZ
ORIENTE	3 a 4	59,9	AURA NUVIA YELA
SUR	4 a 6	31,8	DIEGO EXENOVER BENAVIDES
	6 a 8	20,0	JAIME MARTÍNEZ
OCCIDENTE	8 a 1	63,8	VIA TABLON - APONTE

Una vez proferido el acto administrativo de adjudicación, el mismo deberá ser notificado a sus beneficiarios y deberá ser inscrito ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz (Nariño), en el folio de matrícula inmobiliaria 246-25630, atendiendo el criterio de gratuidad consagrado en el par. 1º art. 84 de la ley 1448 de 2011. Para verificar el cumplimiento de lo anterior, la Oficina competente deberá remitir con destino al proceso de la referencia copia de las actuaciones que adelante, so pena de las sanciones a que haya lugar por negligencia o incumplimiento.

Por secretaria remítanse informes técnico predial y de georeferenciación obrantes en el expediente para el debido cumplimiento de la orden emitida.

TERCERO: ORDENAR a la **Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de La Cruz**, que dentro de los dos meses siguientes a la comunicación de la presente decisión, realice las actividades de actualización, que se exponen a continuación en el folio de matrícula inmobiliaria No. 246-25630 atendiendo el criterio de gratuidad consagrado en el par. 1º art. 84 de la ley 1448 de 2011: **(i) el registro** de la presente sentencia reconociendo el derecho fundamental a la restitución de tierras a favor de MARTHA ARTURO LOPEZ, junto con su grupo familiar; **(ii) la inscripción de prohibición de compraventa o cualquier negociación** durante el término de dos (2) años del inmueble que se ve cobijado por el presente fallo, de acuerdo con el art. 101 de la ley 1448 de 2011; **(iii) el levantamiento de las medidas cautelares** ordenadas por la UAEGRTD y por este Juzgado con ocasión de la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras; **(iv) el registro** del acto administrativo de adjudicación del inmueble, ordenado en el numeral “SEGUNDO” de esta providencia, atendiendo criterios de gratuidad, una vez INCODER comunique su cumplimiento. Registrada la adjudicación, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto deberá informar que ha cumplido, a este Despacho y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, para lo de su competencia.

Por Secretaría LIBRAR los oficios pertinentes con los insertos necesarios.

CUARTO: ORDENAR al **Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC** como autoridad catastral para el Departamento de Nariño que realice, dentro del plazo máximo de dos (2) meses siguientes a la comunicación del registro de la adjudicación por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto ordenada en esta providencia, la actualización de sus registros cartográficos y alfanuméricos del predio cuyas características de individualización se encuentran consignadas en el numeral “SEGUNDO” de la presente sentencia, de conformidad y con estricta sujeción a los datos consignados en los cuadros precedentes, de acuerdo al literal p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. En caso de no tener el anterior numeral algún dato necesario para la actualización encomendada se tendrá en cuenta la información que reposa en los informes técnico predial (fs. 67 a 71, cuaderno 1) y de georeferenciación (fs. 22 a 26, cuaderno 2) aportados a este asunto y, de no ser suficientes, se requerirá a la UAEGRTD para que realice las complementaciones pertinentes.



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

Para efectos de lo anterior, por Secretaría se remitirán los oficios pertinentes con copia de los documentos antes citados y de la presente sentencia, para que el IGAC pueda adelantar el procedimiento de actualización. Adicionalmente, se ordena a la UAEGRTD que preste toda la información y remita al IGAC los documentos necesarios, cuando este último así lo requiera.

QUINTO: ORDENAR al **Banco Agrario de Colombia** y al **Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural** prioricen la asignación y aplicación de forma prioritaria preferente y con enfoque diferencial, para la solicitante señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificado(a) con C.C. 27.189.859 y/o su cónyuge el señor MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ identificado(a) con la C.C. 5.246.394 de los programas de subsidio familiar de vivienda rural, subsidio integral de tierras (Subsidios para la adecuación de tierras, asistencia técnica agrícola, e inclusión en programas productivos) proyectos productivos y todos lo demás especiales que se creen a favor de las personas víctimas de desplazamiento.

Así mismo se ordena al Banco Agrario poner en conocimiento de la solicitante y su familia, la información pertinente acerca las líneas de crédito diseñadas para apoyar a la población desplazada y la forma de acceder a las mismas.

Para verificar el cumplimiento de lo anterior, las entidades requeridas deberán presentar un informe con destino al proceso de la referencia, dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de la presente sentencia.

SEXTO: ORDENAR a la **Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez**, aplique a favor de la señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificado(a) con la C.C. 27.189.859 y su núcleo familiar, la condonación y exoneración del impuesto predial, tasas y otras contribuciones, contempladas en el Acuerdo No. 022 del 15 de agosto de 2013, en relación con el predio objeto del presente proceso de restitución de tierras denominado "LA PEDREGOSA".

Así mismo, se ordena a la **Alcaldía Municipal de El Tablón de Gómez** que en caso de llegar a implementarse por parte del Concejo Municipal de El Tablón de Gómez medidas adicionales relativas a la exención y alivio de impuestos, se incluya como beneficiarios de manera inmediata a MARTHA ARTURO LOPEZ y su núcleo familiar, frente al predio cubierto por la presente sentencia denominado "LA PEDREGOSA".

SEPTIMO: ORDENAR al **Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras de Restitución de Tierras Despojadas**, adelante las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos y entidades del sector financiero, para que adopten planes de alivio que puedan incluir condonación total o parcial de los pasivos contraídos por los beneficiarios de la restitución y que se encuentren asociados al predio objeto de esta solicitud, con la salvedad de que dicho mecanismo se activa solamente por el periodo en que se produjo el desplazamiento de conformidad con el Artículo 43 Inciso 3 del Decreto 4829 de 2011 y el artículo 121 de la ley 1448 de 2011.

OCTAVO: ORDENAR a la **Unidad De Atención y Reparación Integral de Víctimas** para que realice las siguientes acciones: **(i)** incluir en el Registro único de víctimas – RUV a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ identificada con la C.C. 27.189.859, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por los hechos de violencia ocurridos a partir del día 10 de abril de 2003 en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del municipio de Tablón de Gómez – Nariño, junto con las siguientes personas que conformaban su núcleo familiar en ese entonces:

NOMBRE	No. identificación	Parentesco con la solicitante
MIGUEL ANGEL PAZ GOMEZ	C.C. 5.246.394	Compañero permanente
CAMILA PAZ ARTURO	T.I. 1004631451	Hija

(ii) Realizar seguimiento a la situación de la solicitante y su núcleo familiar, con el fin de que se los incluya dentro de todos los programas y proyectos pertinentes, dirigidos a atender a la población víctima de desplazamiento y a acompañar el



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

retorno de los desplazados. Para el cumplimiento de lo anterior, la entidad referida tendrá con un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de este proveído, vencido el cual, deberá allegar con destino a este Despacho, informe sobre las actuaciones realizadas.

NOVENO: ORDENAR al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL para que en coordinación con la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS**, en el marco de sus competencias priorice la aplicación de los beneficios a que se refiere la Ley 731 de 2002 a la señora MARTHA ARTURO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.189.859, y su núcleo familiar, como mujer rural favorecida con el proceso de restitución, en los términos del artículo 117 de la Ley 1448 de 2011.

DECIMO: En aras de dar cumplimiento a lo informado en el literal p) del artículo 91 de la ley 1448 de 2011 sobre contenido del fallo, y en especial teniendo en cuenta la facultad de emitir las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio y goce de los derechos de las personas reparadas; y teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial ha verificado la existencia de otros requerimientos de la comunidad del sector, para garantizar la estabilidad del proceso, **se ordena**, que en un término no superior a seis meses se dé cumplimiento a lo siguiente:

a) A la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas que en conjunto con el Comité Municipal de Justicia Transicional del Municipio del Tablón de Gómez, formule el plan de Retorno del Desplazamiento Masivo ocurrido en el año 2003 en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento La Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, de acuerdo con la Política Pública de Retorno, con el fin de que la población desplazada logre su restablecimiento a través de la generación de oportunidades y alternativas de retorno al lugar de donde se vieron forzadas a salir, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad, dignidad y garantías de no repetición.

b) Al Ministerio del Trabajo, a la Unidad de Víctimas y al SENA, se implemente y ponga en marcha el Programa de Empleo Rural y Urbano al que se refiere el Título IV, Capítulo I, Artículo 67 del Decreto 4800 de 2011, dirigido a beneficiar a la población víctima del desplazamiento ocurrido en la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento La Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, Departamento de Nariño, incluyendo de forma prioritaria a los beneficiarios de la presente decisión

c) Al Ministerio del Trabajo y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que, en el Corregimiento de La Cueva Vereda Pitalito Alto del Municipio del Tablón de Gómez y dentro de los seis meses siguientes a la notificación de ésta providencia, diseñen e implementen el programa de empleo y emprendimiento Plan de Empleo Rural y Urbano, estipulado en el Título IV, Capítulo I, Artículo 68 del Decreto 4800, dirigido a favorecer a la población víctima del desplazamiento forzado, y una vez que sea puesto en ejecución se realice la inclusión prioritaria de los presentes solicitantes, para beneficiarlos con las ayudas que se puedan desprender de dicho programa.

d) A la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ y a la GOBERNACION DE NARIÑO, para que dé inicio a las tareas de gestión de las actividades pertinentes y adopción de los recursos necesarios para la implementación del sistema de alcantarillado, que requiere la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento de la Cueva del Municipio del Tablón de Gómez. En seguimiento del cumplimiento de ésta orden, los referidos entes deberán rendir informe de manera semestral a partir de la notificación de la presente providencia, hasta llevar a cabo la plena ejecución de la citada obra pública.

e) A la Alcaldía Municipal del Tablón de Gómez, que en coordinación con el Departamento de Nariño, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el SENA, y de acuerdo con las calidades y propiedades del suelo, realice un estudio acerca de la viabilidad en la implementación de proyectos productivos sustentables en el predio que fue objeto de la presente solicitud, con el fin de aumentar la diversificación y producción local de alimentos, en el Corregimiento de La



*Juzgado Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Pasto*

Cueva Municipio del Tablón de Gómez, y de darse aquella viabilidad, procederá a adjudicar en favor de los actuales reclamantes la realización de proyectos productivos de conformidad con el estudio realizado. Para el cumplimiento de lo anterior, las entidades referidas contarán con un término no superior a los seis contados a partir de la notificación de éste proveído, vencido el cual, allegará, con destino a éste despacho, informe sobre las actuaciones realizadas.

f) Al INCODER que inicie los estudios y diagnósticos necesarios sobre la viabilidad de la implementación de un sistema de riego y de darse aquella posibilidad procederá a ejecutar ese sistema en los predios restituidos en la Vereda Pitalito Alto Corregimiento de la Cueva Municipio del Tablón de Gómez, para lo anterior tendrá un término de seis meses contados a partir de la eventual expedición de la resolución de reprobación de los proyectos presentados por las asociaciones descritas en el párrafo anterior, de cuyos beneficios se priorizará a los beneficiarios de la presente decisión.

g) Al MINISTERIO DE LA SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL para que en coordinación con la UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS intervenga en la Vereda Pitalito Alto del Corregimiento de la Cueva del Municipio del Tablón de Gómez, adscrito al Departamento de Nariño, a fin de implementar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto PAPSIVI de conformidad con lo establecido en los artículos 137 y 138 de la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011 en su artículo 164, efectuado lo cual procederá a incluir a la beneficiaria de la presente decisión junto a su núcleo familiar.

i) Al BANCO AGRARIO que incluya de manera prioritaria a los presentes solicitantes en los planes y programas de crédito que ha implementado para atender a la población víctima de desplazamiento forzado. Para efecto de corroborar el cumplimiento de la presente orden, deberá allegar a éste despacho un informe semestral sobre la actividad realizada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,



INGRID PAOLA ESTRADA ORDÓÑEZ
JUEZA